



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

RELACIÓN DE ACUERDOS

Órgano de gobierno

Pleno

Lugar

Madrid

Fecha

28 de enero de 2021

Acuerdos adoptados

Uno.- Aprobar el acta de la sesión plenaria extraordinaria del día 21 de enero del año 2021.

Dos.- Quedar enterado del cumplimiento de los acuerdos adoptados en dicha sesión plenaria.

Tres.- Quedar enterado de los informes de las comisiones y vocales sobre actividades del Consejo en los términos que figuran en el acta.

Cuatro.- Aprobar la propuesta del presidente del Tribunal Supremo, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 quinquies de la Ley Orgánica del Poder Judicial 7/2015, de prórroga por un periodo de tres años de los letrados del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo que se relacionan:

D. FRANCISCO JAVIER BELDA SEGURA (área contencioso-administrativo) nombrado como letrado titular con efectos de fecha 10 de febrero de 2020. Se propone su prórroga desde el 10 de febrero de 2021 hasta el 10 de febrero de 2024.

D. CRISTINA JUANA PÉREZ-PIAYA MORENO (área contencioso-administrativo) nombrada como letrada titular con efectos de fecha 10 de febrero de 2020. Se propone su prórroga desde el 10 de febrero de 2021 hasta el 10 de febrero de 2024.

Cinco.- Examinada y debatida la propuesta de la Comisión Permanente (1.1-6, de 13 de enero de 2021) para provisión de la Presidencia de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears, vacante por expiración del mandato del anteriormente nombrado, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en sesión celebrada el 28 de enero de 2021, acuerda nombrar presidente de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears al magistrado Antoni Oliver Reus.

El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y en la capacidad del candidato nombrado, único solicitante de la plaza convocada.

1.- Antoni Oliver Reus ingresó en la Carrera Judicial por el turno libre el 27.06.1986. Ostenta el nº 586 del escalafón general, cerrado a 31.03.2018, contando con más de 34 años de ejercicio ininterrumpido de la jurisdicción.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

Sus destinos por orden cronológico (desde la fecha de toma de posesión) son los siguientes: como juez, su primer destino fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Fregenal de la Sierra (20.08.1986 a 07.09.1987), tras el cual pasó a prestar servicio en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Manacor (26.09.1987 a 16.10.1989). Como magistrado: Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona (31/10/1989 a 13.11.1990); Juzgado de lo Social nº 1 de Palma de Mallorca (01.12.1990 a 02.12.2004); Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (09.12.2004 a 22.06.2015) y, finalmente, fue nombrado presidente de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (01.07.2015 a la actualidad).

2.- El candidato nombrado cuenta con experiencia gubernativa, pues como se ha apuntado, es el actual presidente de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Baleares y es miembro electo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears desde el año 2015.

El candidato nombrado presenta un programa de actuación en el que comienza realizando una valoración de la situación de la sala a fecha de su solicitud. La sala está compuesta por el presidente y dos magistrados, la segunda plaza creada está vacante y ofertada a los nuevos magistrados especialistas, en tanto se ocupa con un juez de adscripción territorial.

Los magistrados cuentan con los medios materiales adecuados para el desarrollo de su actividad, pone de manifiesto que los magistrados cuentan con dispositivos para acceder al expediente judicial en remoto y a la firma digital en remoto, destaca la efectividad del sistema de videoconferencia para mantener las deliberaciones y reuniones entre los magistrados, pone de manifiesto las dificultades que se encuentra a la hora de celebrar vistas por videoconferencia.

Sin embargo, considera necesario reforzar los juzgados de lo social de Palma de Mallorca y de Eivissa que se encuentran sobrecargados con una entrada de asuntos anuales superiores a 1200 asuntos.

3.- En relación con la actividad jurisdiccional, tanto la selección general de resoluciones como la más específica, de tres resoluciones, demuestran por sí solas la extensión y rigor del conocimiento jurídico del candidato nombrado, y que quedan comprendidos dentro de un estándar de excelencia jurisdiccional:

1ª) Sentencia de la Sala Social del TSJ de Illes Balears 1342/2012 - ECLI: ES:TSJBAL:2012:1342.

Es objeto de esta sentencia la cuestión de la responsabilidad empresarial por daños derivados de accidente de trabajo, se trata de un médico interno residente (MIR) de segundo año, de rotación en el servicio de oftalmología en un hospital, cuando sufrió una infección por adenovirus en ambos ojos directamente de un paciente, como secuela permanente le quedó una disminución de la agudeza visual en menos del 50%, sin corrección.

Se declaró probado en la sentencia de instancia que en el hospital concurrían insuficiencia de medios y exceso de trabajo, pero también se acredita que había



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

a disposición de los médicos EPIs y se les dio formación acerca de su empleo adecuado.

No se pudo acreditar la forma de contagio, sin que ello sirva para exonerar a la empresa, se descarta en la sentencia tanto la fuerza mayor como el caso fortuito, tampoco se estima la pretensión de concurrencia de culpas, puesto que el onus probandi corresponde al empleador.

2ª) Sentencia de la Sala Social del TSJ de Illes Balears 707/2016 - ECLI: ES:TSJBAL:2016:707.

Se trata de un supuesto en el que un trabajador de nacionalidad holandesa y domicilio en Palma de Mallorca prestaba servicios como capitán de un buque con bandera de la Isla de Guernsey, con puerto base en Palma de Mallorca y propiedad de una sociedad domiciliada en Guernsey.

Presentada demanda de despido ante los juzgados de Palma de Mallorca se dictó sentencia declarando la falta de competencia de la jurisdicción española para conocer del asunto.

El TSJ aplica el Reglamento UE "Bruselas I" al haberse planteado la demanda antes del 10 de enero de 2015, fecha a partir de la cual es aplicable el Reglamento 1215/2012.

Se descarta la sumisión expresa contenida en el contrato de trabajo por aplicación del artículo 21 del Reglamento y se descarta también el abanderamiento de conveniencia para evitar la competencia de los tribunales españoles, el artículo 18 del Reglamento Bruselas I determina la competencia de los tribunales españoles pues el buque es equiparable a un establecimiento ya que por tal debe entenderse el lugar donde habitualmente se ejerce una actividad, el TSJ considera que si el buque tiene puerto base y centro de actividad en Palma de Mallorca la competencia territorial corresponde a los juzgados de los social de Palma de Mallorca para conocer de las demandas por despido formuladas por los trabajadores que prestan servicios en dicho buque.

3ª) Sentencia de la Sala Social del TSJ de Illes Balears 245/2019 - ECLI:ES:TSJBAL:2019:245

Se trata de un supuesto en que un trabajador venía prestando servicios como conductor de autobús en servicios de transporte de viajeros en la isla de Ibiza, fue despedido como consecuencia de una colisión múltiple ocurrida en 2017.

El demandante fue sometido a pruebas alcohol con resultado 0.0 y estupefacientes con resultado positivo, el TSJ no encontró elementos de juicio que pudieran llevar a la conclusión de que el trabajador se encontraba bajo los efectos de sustancias tóxicas o estupefacientes y el resultado positivo no es prueba suficiente para acreditar que el trabajador se encontraba bajo los efectos del cannabis en el momento de ocurrir el accidente según la prueba pericial practicada en el proceso.

4.- Al margen de su actividad jurisdiccional y gubernativa, el Pleno ha valorado que el candidato nombrado ha sido profesor asociado de la escuela universitaria de relaciones laborales durante 5 cursos, profesor asociado de la



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

UIB (20 cursos) y de la escuela de práctica judicial de la UNED (2002/07). Asimismo, ha sido ponente y conferenciante en cursos, seminarios y mesas redondas organizados por diversas instituciones.

El candidato ha venido desarrollando actividades de colaboración con el CGPJ. Ha sido tutor del curso de cambio de orden jurisdiccional en los años 2005, 2011 y 2016, analista del CENDOJ desde el año 2005 hasta 2016 y experto del proyecto «Improvement of the Efficiency of Pre-service Trainings for Candidate Judges and Prosecutors» que actualmente se está desarrollando en Turquía. También ha sido vicepresidente de la Junta Electoral de la comunidad autónoma en el periodo 2015/18.

Todo lo expuesto hace del magistrado Antoni Oliver Reus, único candidato a la plaza, plenamente idóneo para el desempeño de la misma.

Frente a este acuerdo formula voto particular María Concepción Sáez Rodríguez, al que se adhieren Álvaro Cuesta Martínez y María Pilar Sepúlveda García de la Torre.

Seis.- Examinada y debatida la Propuesta de la Comisión Permanente (1.1-1, de 13 de enero de 2021) para provisión de la Presidencia de la Audiencia Provincial de Cantabria, vacante por expiración del mandato del anteriormente nombrado, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en sesión celebrada el 28 de enero de 2021, acuerda nombrar presidente de la Audiencia Provincial de Cantabria al magistrado José Arsuaga Cortázar.

El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y en la capacidad del candidato nombrado, único solicitante de la plaza convocada.

1.- José Arsuaga Cortázar ingresó en la Carrera Judicial por el turno libre el 19.05.1992. Ostenta el nº 1753 del escalafón general, cerrado a 31.03.2018.

Sus destinos por orden cronológico (desde la fecha de toma de posesión) son los siguientes: como juez, Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Medio Cudeyo (12.06.1992 a 28.11.1994) y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Torrelavega (13.12.1994 a 02.09.1997); como magistrado, su primer destino fue el Juzgado de lo Penal núm. 7 de Bilbao (19.09.1997 a 02.11.1999), tras el que prestó servicio en el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Santander (19.11.1999 a 16.06.2015) y, finalmente, fue nombrado presidente de la Audiencia Provincial de Cantabria (22.06.2015 a la actualidad).

2.- El candidato nombrado, como ya se ha apuntado, es el presidente de la Audiencia Provincial de Cantabria. Miembro electo Sala de Gobierno TSJ de Cantabria en el periodo 2002-04 y 2009-2015 y miembro nato desde 2015 hasta la actualidad.

El candidato, como actual presidente de la Audiencia Provincial, es conocedor en profundidad de la situación de la misma y de los juzgados de la provincia. En cuanto a las medidas incluidas en su programa de actuación se incluyen aquellas que tienen por objeto dar una respuesta adecuada a la alta litigiosidad de la



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

provincia, en especial en la jurisdicción civil (memoria 2019) por el fuero del domicilio de las personas jurídicas y los asuntos de condiciones generales de contratación con la entidad Banco Santander, por lo que se solicitó en 2019 un refuerzo de la sección 4ª de la Audiencia, pero en octubre de 2020 tuvo lugar una jubilación de dicha sección, por lo que solo la ampliación efectiva de la plantilla podría paliar la situación. En concreto plantea que de los 8 magistrados adscritos a dos secciones civiles se pase a 9 magistrados integrados en 3 secciones civiles. También considera necesario ampliar en un magistrado la plantilla penal de la Audiencia.

Su plan de actuación es continuista en cuanto a la organización, coordinación y unificación de criterios procesales entre los magistrados de la audiencia. Remarca un esfuerzo en favorecer las condiciones que permitan la obtención de conformidades penales en colaboración con la fiscalía y la implantación de la mediación como una forma extraprocesal de solución de conflictos.

También incluye en su plan una guía de buenas prácticas en los procedimientos de adopción de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad, la importancia de las oficinas de asistencia a las víctimas, así como las pautas y coordinación para obtener una mejor respuesta judicial con la comisión provincial de coordinación en materia de violencia sobre la mujer.

Considera oportuno, así mismo, la implantación de la nueva oficina judicial en Cantabria y por último valora de forma positivo los medios materiales e informáticos de que disponen los magistrados para desarrollar su labor en el despacho y en el domicilio, así como el alto valor de utilidad que tiene la implantación real del expediente judicial electrónico para el trabajo de los jueces y magistrados.

En el curso de la comparecencia que se celebró el 13 de enero de 2021 se mostró partidario de impulsar la mediación, explicó el funcionamiento de lo que denomina "sesiones clínicas", que versan sobre cuestiones de interés jurídico general, y valoró positivamente las aportaciones que el Derecho de la Unión Europea ha realizado a la tutela del consumidor y del inversor.

3.- En relación con la actividad jurisdiccional, tanto la selección general de resoluciones como la más específica, de tres resoluciones, demuestran por sí solas la extensión y rigor del conocimiento jurídico del candidato nombrado, y que quedan comprendidos dentro de un estándar de excelencia jurisdiccional:

1ª) Sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria de 21 de julio de 2016 - ECLI: ES:APS:2016:850.

Aplicación del sistema de valoración de daños en el momento transitorio tras la publicación de la Ley 35/2015 que modifica el Texto Refundido de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor. La reforma supuso la sustitución del baremo entonces vigente por la introducción de un nuevo sistema de baremo. El accidente tuvo lugar antes de la mencionada reforma, sin embargo se usa el nuevo baremo como factor de corrección para



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

grandes inválidos, en el caso concreto cuando se trata de valorar el lucro cesante de una persona que todavía no ha accedido al mercado laboral

2ª) Sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria de 7 de marzo de 2017- ECLI: ES:APS:2017:726.

El asunto tiene por objeto un instrumento financiero denominado “valores Santander”, sobre el que no había jurisprudencia del TS, lo que motivó que se dieran interpretaciones diferentes de distintas AP. Siendo Cantabria la audiencia del domicilio social de la entidad emisora de los valores, comenzó a fijar criterio sobre la validez y eficacia de los valores en su comercialización, rechazando la declaración de nulidad pretendida en las demanda, pero estimando la anulabilidad por razón del vicio del consentimiento.

3ª) Sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria de 21 de julio de 2019 - ECLI: ES:APS:2020:601.

La sentencia resuelve una pretensión de modificación de medidas definitivas relativas a una menor de 7 años. El padre pide la guardia y custodia, así como el establecimiento de un régimen de visita de la madre, más pensión alimenticia.

La relevancia procede de la situación familiar previa, con una grave conflictividad entre los padres que fue empeorando con el tiempo; dado que el padre no había visto a la hija desde su primer año de vida y que la madre ingresó en prisión por incumplimiento reiterado del deber de procurar la comunicación del a hija con su padre.

4.- Al margen de su actividad jurisdiccional y gubernativa, el Pleno ha valorado que el candidato nombrado ha sido profesor de la UNED durante un curso, profesor del máster en Administración de Empresas de CESINE (2004-2009) y profesor de la escuela de práctica jurídica tanto del ICA de Cantabria como de la Universidad de Cantabria.

También ha colaborado con la Escuela Judicial como codirector y como ponente en varios cursos de formación inicial y de formación especializada; ha impartido ponencias en cursos organizados por distintas organizaciones e instituciones y ha sido tutor de prácticas en las promociones 51 a 55.

Es autor de diversos artículos doctrinales, especialmente en el ámbito del Derecho de familia y sucesiones, y ha participado en 8 libros colectivos.

También es miembro del consejo de redacción de la editorial jurídica SEPIN (Servicio de Propiedad Inmobiliaria).

Todo lo expuesto hace del magistrado José Arsuaga Cortázar, único candidato a la plaza, plenamente idóneo para el desempeño de la misma.

Frente a este acuerdo formula voto particular María Concepción Sáez Rodríguez, al que se adhieren Álvaro Cuesta Martínez y María Pilar Sepúlveda García de la Torre.

Siete.- Examinada y debatida la propuesta de la Comisión Permanente (1.1-2, de 13 de enero de 2021) para provisión de la Presidencia de la Audiencia Provincial de Granada, vacante por expiración del mandato del anteriormente



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

nombrado, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en sesión celebrada el 28 de enero de 2021, acuerda nombrar presidente de la Audiencia Provincial de Granada al magistrado José Luis López Fuentes.

El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y en la capacidad del candidato nombrado, único solicitante de la plaza convocada.

1.- José Luis López Fuentes ingresó en la Carrera Judicial por el turno libre el 27.06.1986. Ostenta el nº 550 del escalafón general, cerrado a 31.03.2018, contando con más de 34 años de ejercicio ininterrumpido de funciones judiciales.

Sus destinos por orden cronológico (desde la fecha de toma de posesión) son los siguientes: como juez, Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Aguilar de la Frontera (21.07.1986 a 26.09.1989); como magistrado: Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Málaga (13.10.1989 a 13.10.1990); Juzgado de Instrucción núm. 7 de Málaga (19.10.1990 a 29.01.1997); Juez decano exclusivo de Málaga (10.02.1997 a 19.05.2005); Audiencia Provincial de Málaga (adscrito) (19.05.2005 a 28.06./2005); Sección 4.ª de la Audiencia Provincial de Málaga (29.06.2005 a 17.06.2015); Presidente de la Audiencia Provincial de Granada (30/06/2015 a la actualidad).

2.- El candidato nombrado, como ya se ha apuntado, es el presidente de la Audiencia Provincial de Granada. Ha sido Juez Decano de Málaga desde 1997 hasta 2005, miembro electo Sala de Gobierno TSJ de Andalucía (1997 a 2005) y miembro nato desde 2015.

El candidato, como actual presidente de la Audiencia Provincial, es conocedor en profundidad de la situación de la misma y de los juzgados de la provincia. En su programa de actuación se incluyen medidas que tienen por objeto dar una respuesta adecuada a la situación social y jurisdiccional ocasionada por la pandemia generada por la Covid-19 y las medidas adoptadas para paliar sus efectos.

En cuanto a la comunicación con los magistrados tanto de la audiencia, como con los jueces decanos ha optado por el uso de whatsapp a través de su herramienta de comunicación a través de grupos, siendo un método ágil en especial en tiempos de limitación de la movilidad personal.

Con el fin de revertir los efectos del parón de los juicios no esenciales se constituyó una comisión provincial para la reactivación de la actividad judicial.

Se han adoptado medidas de refuerzo sin relevación de funciones, mencionando en especial las secciones 3ª y 5ª y de las secciones penales durante la tramitación de los "macrojuicios".

Siendo su plan de actuación continuista en cuanto a la organización, coordinación y unificación de criterios procesales entre los magistrados de la audiencia. Remarca un esfuerzo en favorecer las condiciones que permitan la obtención de conformidades penales en colaboración con la fiscalía y la implantación de la mediación como una forma extraprocesal de solución de conflictos.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

También incluye en su plan una mención al uso de la sala Gessel para víctimas especialmente vulnerables, en los procedimientos de adopción de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad, la importancia de las oficinas de asistencia a las víctimas, así como las pautas y coordinación para obtener una mejor respuesta judicial en materia de violencia sobre la mujer.

Considera oportuno, así mismo, la implantación de la nueva oficina judicial en Granada y por último valora de forma positivo el refuerzo en el empleo de medios materiales e informáticos de que disponen los magistrados para desarrollar su labor en el despacho y en el domicilio.

Hace mención del especial e importante papel de la sala de gobierno del TSJ de Andalucía, al tratarse de una comunidad con muchas provincias y dos ciudades autónomas y órganos judiciales, dando lugar a una sala de gobierno con 32 miembros, por lo que requiere una especial atención por parte del presidente de la audiencia.

Igualmente, refiere en su plan de actuación al "Plan justicia 2030" y la necesidad de actualización de las medidas de prevención de riesgos en la carrera judicial y además considera necesario que las secciones de la audiencia estén en la misma sede y no dispersas como hasta ahora.

Considera oportuno ampliar en dos el número de magistrados de las secciones penales y crear así una nueva sección, siendo todas ellas de 4 magistrados, siendo ello acompañado de un refuerzo en la plantilla de funcionarios y un LAJ de refuerzo.

3.- En relación con la actividad jurisdiccional, tanto la selección general de resoluciones como la más específica, de tres resoluciones, demuestran por sí solas la extensión y rigor del conocimiento jurídico del candidato nombrado, y que quedan comprendidos dentro de un estándar de excelencia jurisdiccional:

1ª) Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada - ECLI:ES:APGR:2016:1847

Se trata de un asunto relacionado con vicios constructivos en un complejo de urbanización con cinco complejos residenciales ubicados en una ladera cuyo deslizamiento ha provocado daños en las edificaciones.

En el proceso fue clave delimitar las responsabilidades de los agentes intervinientes en la construcción, desde el promotor, el constructor, los ingenieros, arquitectos hasta los responsables de los estudios geotécnicos.

Se trataba de un asunto complejo, tanto desde el punto de vista de composición de la relación jurídica procesal, por cuanto los adquirentes/actores no habían recibido la obra, pero si había una declaración de final de obra, como complejo por el múltiple número de agentes intervinientes en el proceso de construcción y la dificultad de individualizar la responsabilidad de cada uno, dando lugar a una prolija y complicada prueba.

2ª) Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada 874/2019 - ECLI:ES:APGR:2019:874



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

Este asunto versa sobre propiedad industrial, en concreto sobre la protección de variedades vegetales y la concesión sobre los mismos, por cuanto se ejercita acción para mantener que hay dos tipos de protección temporal a favor del titular de la variedad vegetal protegida, la que tiene lugar frente a actos de terceros durante el tiempo que media entre la publicación de la solicitud y la concesión para los que se prevé una indemnización razonable y por otro lado protección frente a los actos posteriores a la concesión, entendiendo la Audiencia en este caso que es compatible la indemnización por las infracciones producidas en ambos periodos.

3ª) Sentencia de 16.04.2020 en el recurso de apelación 719/2019

Responsabilidad civil por accidente de tráfico y aplicación del nuevo baremo tras la modificación introducida por la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, así como de las pautas seguidas en el pleno de unificación de criterios de magistrados de las secciones civiles de la AP de Granada.

Se concluye que la compañía aseguradora no puede solicitar en el procedimiento una prueba pericial no solicita en el trámite prejudicial, puesto que ello provocaría una situación de desequilibrio entre las partes y obliga a la compañía a acompañar a su oferta inicial un dictamen médico.

4.- Al margen de su actividad jurisdiccional y gubernativa, el Pleno ha valorado que el candidato nombrado ha sido profesor de la Universidad de Málaga, así como tutor de prácticas externas del plan de estudios del grado en derecho.

También ha sido coordinador de las practicas tuteladas en Andalucía en el año 2011; presidente de la Junta Electoral Provincial (2018, 2019 -3 elecciones-); presidente de la Comisión Provincial de Policía Judicial desde 2015 y de la comisión de coordinación en materia de violencia sobre la mujer desde 2018; presidente de la comisión de seguimiento "Lexnet" desde el año 2015.

Todo lo expuesto hace del magistrado José Luis López Fuentes, único candidato a la plaza, plenamente idóneo para el desempeño de la misma.

Frente a este acuerdo formula voto particular María Concepción Sáez Rodríguez, al que se adhieren Álvaro Cuesta Martínez y María Pilar Sepúlveda García de la Torre.

Ocho.- Examinada y debatida la propuesta de la Comisión Permanente (1.1-3, de 13 de enero de 2021) para provisión de la Presidencia de la Audiencia Provincial de León, vacante por expiración del mandato de la anteriormente nombrada, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en sesión celebrada el 28 de enero de 2021, acuerda nombrar presidenta de la Audiencia Provincial de León a la magistrada Ana del Ser López.

El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y en la capacidad de la candidata nombrada, única solicitante de la plaza convocada.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

1.- Ana del Ser López ingresó en la Carrera Judicial por el turno libre el 08.02.1990. Ostenta el nº 1287 del escalafón general, cerrado a 31.03.2018, con más de 30 años de ejercicio ininterrumpido de la jurisdicción.

Sus destinos por orden cronológico (desde la fecha de toma de posesión) son los siguientes: como jueza, Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Villalba (02.03.1990-02.04.1992); como magistrada: Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Las Palmas de Gran Canaria (30.04.1992-13.01.1999); Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de León (14.04.1999-20.04.2007); Sección 1ª de la Audiencia Provincial de León (27.04.2007-07.05.2015); Presidenta de la Audiencia Provincial de León (15.05.2020 a la actualidad)

Miembro electo Sala de Gobierno TSJ de Castilla y León (20014/15) y miembro nato desde 2015.

2.- La candidata nombrada, como ya se ha apuntado, es la presidenta de la Audiencia Provincial de León. Ha sido miembro electo Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (2014/15) y es miembro nato desde 2015.

Como actual presidenta de la Audiencia Provincial, Ana del Ser López es conocedora en profundidad de la situación de la misma y de los juzgados de la provincia.

Hace especial hincapié en las relaciones con los jueces y magistrados de Ponferrada y señala que a través de Sala de Gobierno se consiguió el refuerzo de aquellos órganos en los que se apreciaban problemas, con petición de medidas concretas.

Remarca la importancia del expediente judicial electrónico y la implantación de la nueva oficina judicial.

Las relaciones fluidas con todos los operadores jurídicos ha sido una constante durante los últimos años, las reuniones con los Colegios de Abogados y con el Secretario Coordinador y decanos de todos los partidos judiciales han sido frecuentes.

Considera necesaria la realización de las obras solicitadas en el juzgado de violencia de género de León y de la denominada cámara Gesell para la declaración de los menores, que han sido víctimas en condiciones adecuadas.

Se ha trabajado con el Colegio de Abogados en la elaboración de un Protocolo sobre medidas de limitación en la extensión de escritos procesales que ha sido firmado.

La Audiencia Provincial de León se encuentra dividida en dos Secciones Civiles y una Sección Penal. Cada Sección Civil cuenta con tres magistrados y Penal con cinco magistrados titulares y dos de refuerzo sin relevación de funciones.

Pone de manifiesto la necesidad de la creación de una plaza de magistrado en la sección penal y la división en dos secciones penales. También considera oportuno la creación de una plaza de magistrado en una sección civil. Por último,



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

traslada la necesidad de separación de jurisdicciones en Ponferrada, 5 de instancia y 3 de instrucción.

3.- En relación con la actividad jurisdiccional, tanto la selección general de resoluciones como la más específica, de tres resoluciones, demuestran por sí solas la extensión y rigor del conocimiento jurídico de la candidata nombrada, y que quedan comprendidos dentro de un estándar de excelencia jurisdiccional:

1ª) Sentencia de la Audiencia Provincial de León 743/2015 – ECLI:ES:APLE:2015:743.

Se trata de un asunto que versa sobre la calificación jurídica de la obligación impuesta por la testadora a la heredera para que la cuide y asista hasta su fallecimiento, bien como condición suspensiva o bien como carga modal.

Se trata de una cuestión sobre la que la doctrina y la jurisprudencia es contradictoria, pero es de importancia puesto que el modo no limita la eficacia de la institución, pero obliga al heredero a cumplir la carga. La calificación que hace la audiencia como condición suspensiva priva de eficacia al testamento si la condición no se ha cumplido y ello ha de ocurrir antes de la apertura de la sucesión. Por tanto, la consecuencia tras el fallo y su confirmación en casación es que la institución de heredo devienen ineficaz y se abre la sucesión abintestato.

2ª) Sentencia de la Audiencia Provincial de León 163/2017 – ECLI: ES: APLE: 2017: 163

En la sentencia se declara culpable un concurso de acreedores y se condena a los administradores a la cobertura del déficit que resultara de las operaciones de liquidación del concurso. Se condena a la sociedad matriz del grupo como cómplice a devolver la cantidad que se corresponde con la cuantía del crédito transferido, la audiencia lo matiza a la indemnización por daños y perjuicios, la condena a los administradores es subsidiaria de la de dicha sociedad matriz.

Se rechaza con ello la pretensión de los apelantes de identificar el déficit concursal con la diferencia que había entre el activo y el pasivo al tiempo de la declaración del concurso, determinada en el informe de la administración concursal, puesto que en dicho activo inicial se encuentra un crédito con de la concursada con la matriz por disposiciones de dinero injustificadas, la sentencia entiende que las disposiciones injustificadas por parte de la matriz, y no devueltas, son el origen de la insolvencia de la concursada.

3ª) Sentencia de la Audiencia Provincial de León 291/2020 - ECLI: ES:APLE:2020:291.

Se plantea una cuestión prejudicial ante el TJUE sobre el plazo de prescripción de la acción y la aplicación de la facultad de estimación judicial del daño en relación con la aplicación transitoria de la Directiva de daños.

En el litigio principal es fundamental concretar la normativa aplicable para fijar el plazo de prescripción de la acción de daños ejercitada y la aplicación de las reglas sobre carga de la prueba y estimación judicial del daño, extremos



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

sobre los que giran, en gran medida, los recursos interpuestos por las entidades demandadas.

Los hechos infractores del artículo 101 TFUE origen de la demanda son anteriores a la entrada en vigor de la Directiva 2014/104/UE, mientras que la sanción de la comisión se produce entre la fecha de vigencia de la Directiva y el plazo de transposición que expiraba el 27 de diciembre de 2006 y que España incumple; la demanda se ejercita con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley.

4.- Al margen de su actividad jurisdiccional y gubernativa, el Pleno ha valorado que la candidata nombrada ha sido profesora asociada de derecho mercantil de la Universidad de León durante 8 cursos, ha participado en el grupo de innovación docente de dicha universidad, también ha realizado actividad docente en la Escuela Judicial (2020) y en el Consejo de Europa en colaboración con la Escuela Judicial.

También ha sido miembro de REJUE Civil en el periodo 2016/19 y de REDUE Civil desde 2019 hasta la actualidad.

Por otro lado, ostentó la presidencia de la Junta Electoral Provincial en las elecciones del año 2011.

Todo lo expuesto hace de la magistrada Ana del Ser López, única candidata a la plaza, plenamente idónea para el desempeño de la misma.

Frente a este acuerdo formula voto particular María Concepción Sáez Rodríguez, al que se adhieren Álvaro Cuesta Martínez y María Pilar Sepúlveda García de la Torre.

Nueve.- Examinada y debatida la propuesta de la Comisión Permanente (1.1-4, de 13 de enero de 2021) para provisión de la Presidencia de la Audiencia Provincial de Navarra, vacante por expiración del mandato de la anteriormente nombrada, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en sesión celebrada el 28 de enero de 2021, acuerda nombrar presidente de la Audiencia Provincial de Navarra al magistrado José Julián Huarte Lázaro.

El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y en la capacidad del candidato nombrado, único solicitante de la plaza convocada.

1.- José Julián Huarte Lázaro ingresó en la Carrera Judicial por el turno libre el 29.03.1985. Ostenta el nº 468 del escalafón general, cerrado a 31.03.2018, contando con más de 35 años de ejercicio ininterrumpido de la jurisdicción.

Sus destinos por orden cronológico (desde la fecha de toma de posesión) son los siguientes: como juez, su primer destino fue el Juzgado de Distrito núm. 1 de Tortosa (15.05.1985 a 18.03.1986) tras el cual prestó servicio en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Aoiz (04.04.1986 a 10.01.1989); como magistrado, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Logroño (30.01.1989 a 28.04.1990) y en la Audiencia Provincial de Navarra (17.05.1990 a la actualidad).



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

2.- El candidato nombrado cuenta con experiencia gubernativa, pues ha sido miembro electo de la Sala de Gobierno TSJ La Rioja en 1990 y de la Sala de Gobierno del TSJ de Navarra entre 1995 y 1998.

El candidato nombrado presenta un programa de actuación en el que especifica que la audiencia está integrada por 3 secciones, 2 penales y 1 civil. Considera importante que se continúen con las reuniones de los presidentes de las secciones, para que tengan una visión global de la actuación de la audiencia.

Expone la necesidad de coordinación entre los magistrados de la audiencia para lograr la unificación de criterios procesales, e incluso materiales cuando sea necesario.

En cuanto a la nueva oficina judicial estima oportuno que su implantación comience por la audiencia, que se mantenga la eficacia que la oficina tiene actualmente y se desarrollen programas de formación del personal.

Menciona la importancia de hacer efectiva en el ámbito de la audiencia, tanto la jurisdicción civil, como la penal, como medios alternativos eficaces para la resolución de los conflictos.

En cuanto a las conformidades penales entiende que previo al señalamiento del juicio oral es idónea la celebración de una comparecencia que permita conocer el alcance de la prueba propuesta, y con ello también conocer las posibilidades de llegar a una conformidad.

En cuanto a la implementación le expediente judicial electrónico tiene evidentes ventajas, que se han puesto de manifiesto desde la declaración del estado de alarma en marzo de 2020.

Propone la necesidad de formalizar protocolos de actuación con aquellas personas a las que se le han impuesto penas privativas de libertad y precisan de atención de salud mental, con el fin de acceder a los recursos socio-sanitarios adecuadas a cada patología, con las medidas de control y seguridad adecuadas.

3.- En relación con la actividad jurisdiccional, tanto la selección general de resoluciones como la más específica, de tres resoluciones, demuestran por sí solas la extensión y rigor del conocimiento jurídico del candidato nombrado, y que quedan comprendidos dentro de un estándar de excelencia jurisdiccional:

1ª) Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra 71/2012 - ECLI:ES:APNA:2012:71.

Esta resolución tiene por objeto una memoria testamentaria y el análisis de sus requisitos y contenido. La audiencia consideró que el legado de cosa específica (acciones en sociedades mercantiles) no afectaba a la institución de heredero, la cual permanece inalterada en su contenido esencial, pues la atribución de acciones constituye un legado a favor de un coheredero, lo cual está permitido por el derecho civil navarro, que además no establece ninguna limitación cuantitativa a la libertad de disponer.

2ª) Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra 200/2004 - ECLI:ES:APNA:2004:200.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

El problema fundamental en este caso era fijar el grado de participación de cada uno de ellos en relación con el resultado de muerte, el delito de asesinato, así como el objeto del veredicto sometido al jurado.

Se defendió en la sentencia, conforme a la propuesta sometida al Jurado, que el grado de participación de uno de los acusados, era en concepto de cooperación necesaria, acudiendo incluso a la participación omisiva como título de imputación.

Se fundamentó que la conducta omisiva de uno de los partícipes, sin realizar ninguna conducta de evitación del acuchillamiento no puede excluir su autoría directa, y por ello fue considerada su cooperación necesaria.

En el recurso de apelación el TSJ modificó la sentencia en ese extremo, en casación el TS confirmó el criterio del Tribunal del Jurado.

3ª) Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra 287/2016 - ECLI: ES:APNA:2016:287.

Tiene por objeto el estudio del alcance de la responsabilidad penal de un club de fútbol por un delito de corrupción deportiva. Se parte de aplicar la doctrina del TS acerca de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, responsabilidad exigible en el caso de ausencia de medidas de control adecuadas para evitar el delito.

La audiencia consideró que se aprecia la existencia del requisito objetivo que ampara la exigencia de responsabilidad penal a una persona jurídica y que en el caso de un club de fútbol de la liga de fútbol profesional no concurren; pues en la normativa reguladora de la actividad del club no se mencionan que concretas medidas le son exigibles, salvo la auditoría externa que es exigible y el club la había realizado. El modelo de organización de un club de fútbol profesional no encaja en los supuestos del artículo 31 bis en redacción por la LO 1/2015.

4.- Al margen de su actividad jurisdiccional y gubernativa, el Pleno ha valorado que el candidato nombrado ha sido profesor de prácticum en la Universidad de Navarra durante 2 cursos y profesor asociado de la Universidad Pública de Navarra desde el curso académico 2016/17.

También ha sido presidente de Junta Electoral de Zona en dos ocasiones, de la Junta Electoral Provincial en las elecciones de 1993 y 2011.

Todo lo expuesto hace del magistrado José Julián Huarte Lázaro, único candidato a la plaza, plenamente idóneo para el desempeño de la misma.

Frente a este acuerdo formula voto particular María Concepción Sáez Rodríguez, al que se adhieren Álvaro Cuesta Martínez y María Pilar Sepúlveda García de la Torre.

Diez.- Examinada y debatida la propuesta de la Comisión Permanente (1.1-2, de 14 de enero de 2021) para provisión de la Presidencia de la Audiencia Provincial de Illes Balears, vacante por expiración del mandato del anteriormente nombrado, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en sesión celebrada el



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

28 de enero de 2021, acuerda nombrar presidente de la Audiencia Provincial de Illes Balears al magistrado Diego Jesús Gómez-Reino Delgado.

El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y en la capacidad del candidato nombrado, único solicitante de la plaza convocada.

1.- Diego Jesús Gómez-Reino Delgado ingresó en la Carrera Judicial por el turno libre el 19.02.1991. Ostenta el nº 1492 del escalafón general, cerrado a 31.03.2018 y ha ejercido ininterrumpidamente jurisdicción durante casi 30 años.

Sus destinos por orden cronológico (desde la fecha de toma de posesión) son los siguientes: como juez, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Betanzos (18.03.1991 a 26.03.1994); como magistrado, su primer destino fue el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Eivissa (14.04.1994 a 04.09.1996), posteriormente el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Palma de Mallorca (23.09.1996 a 02.11.1999), la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Baleares (10.11.1999 a 07.11.2001), el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Palma de Mallorca (14.11.2001 a 23.12.2005), la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Illes Balears (30.12.2005 a 21.06.2013), siendo el presidente de la referida Sección desde el 21.06.2013 y presidente de la Audiencia Provincial de Illes Balears desde el 13.05.2015 a la actualidad.

2.- El candidato nombrado es presidente de la Audiencia Provincial de Illes Balears y miembro de Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears desde 2015, y presenta un programa de actuación que comienza con una valoración de la situación actual de la misma, la audiencia tiene en la actualidad 5 secciones, dos penales compuestas por 6 magistrados cada una y 3 civiles compuestas por 4 magistrados cada una.

En su programa valora de manera positiva el funcionamiento de las secciones civiles, como solución para evitar resoluciones contradictorias que sean advertidas por los órganos unipersonales propone la designación de magistrados que actúen como órganos de enlace con las secciones civiles, fomentar el uso de "pleitos testigo" (mediante el procedimiento de abocar al conocimiento del pleno asuntos que tengan igual contenido (artículos 197 y 264 de la LOPJ); actividades formativas de los magistrados; y favorecer encuentros y mantener reuniones informales frecuentes con los presidentes de las Secciones Civiles para conocer posibles problemas, tanto jurisdiccionales como personales, marcha de la Sección, necesidades y nivel de satisfacción de los compañeros

En cuanto a las penales considera que la carga de trabajo es grande y propone como medida que funcionen a modo de tribunales de instancia, es decir, que en cada sección unos magistrados se encarguen de la celebración de juicios de larga duración y otros de mantener el ritmo en la resolución de recurso contra autos y sentencias. Con la implantación de la nueva oficina judicial la distribución del trabajo debería permitir que las secciones penales funcionasen como 3 ó 4 secciones con autonomía, bien mediante un reparto por competencias, bien por una división de cada sección en dos subsecciones,



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

incluso propone como tercera alternativa su funcionamiento como un solo tribunal de instancia penal.

Aporta soluciones para evitar incomparecencias en juicio de los acusados extranjeros, habituales en la audiencia, mediante la exhibición previa del billete de transporte para acudir al acto de juicio, así como un mejor control de los exhortos.

3.- En relación con la actividad jurisdiccional, tanto la selección general de resoluciones como la más específica, de tres resoluciones, demuestran por sí solas la extensión y rigor del conocimiento jurídico del candidato nombrado, y que quedan comprendidos dentro de un estándar de excelencia jurisdiccional:

1ª) Auto de 07.11.2014. Rollo 491/14 (Autos DPA 2677/08), Pieza 25, del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma. Se trata de un recurso contra un auto de transformación en un proceso por delito fiscal atribuido a la cónyuge como partícipe en el delito fiscal cometido por su marido, como sujeto obligado al impuesto, solo lo podría ser por un tipo básico; dado que la sociedad no era interpuesta y sus socios no se ocultaban tras ella según la acusación. La relevancia deviene por el alcance del juicio de acusación. No solo respecto al aspecto objetivo, sino también al subjetivo (dolo). Este criterio es el seguido por la doctrina a partir de la STC 167/2002. Hasta ese momento el dolo era un elemento normativo, de calado jurídico y no fáctico

2ª) Sentencia de 23.07.2013 (Rollo 85/2012). Prevaricación administrativa en contrato de obra por el procedimiento de concurso. Fraude a la Administración y revelación de información confidencial. Casada en parte por el TS. El fallo se modifica en orden aplicar el concurso de delitos de prevaricación y fraude en concurso medial y condenar a dos de los acusados como cómplices. A uno de ellos respecto del delito de revelación de información reservada y al otro por el delito de fraude a la administración.

Responsabilidad civil al no poder retrotraer la venta por haberse vendido en subasta el bien, procede la indemnización por la diferencia del valor obtenido en el concurso y la valoración real del bien.

Debate en el juicio sobre la posibilidad de condenar a quien se acusa de cómplice a la responsabilidad civil que le correspondía como cooperador habida cuenta de que el relato de hechos se describía conductas de autoría y de cooperación.

Este aspecto es casado por el TS, por respeto al principio de rogación de parte

3ª) Sentencia de 29.10.2015 (Rollo 16/15). Delito Fiscal: ganancias derivadas de un delito previo de estafa cometido en UK. Renta por incrementos no justificados de patrimonio que afloran en España.

Los afloramientos de incrementos de patrimonio que emergieron tuvieron por causa la venta de acciones del acusado a precio inflado, siendo este el motivo por el que resultó condenado en 2008. Esta venta, en la fecha en que se produjo: año 2000, estaba sujeta a tributación en UK como renta lícita - no se



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

declara delictiva hasta el 2008 -. En esa fecha - año 2000 y 2001 - el acusado era residente fiscal en Gran Bretaña, con lo cual tenía que haber pagado el impuesto en su país y estaba exento de abonarlo en España.

Condena, sin embargo, por delito fiscal por la sociedad patrimonial creada ficticiamente. Levantamiento del velo.

Delito de blanqueo de capitales comisión dolosa por el asesor jurídico y el cliente y comisión por imprudencia grave por una empleada del despacho. Absolución del notario, dado que aunque no comunicó al SEPBLAC la operación de compra por precio confesado y con indicadores de riesgo de blanqueo, sin embargo desde el punto de vista de la antijuridicidad material no hubo lesión al bien jurídico protegido. El riesgo no controlado por el notario vino atemperado porque aunque la operación sospechosa tuvo lugar después de la ley 19/2003, no se había dictado el reglamento que establecía algunas de las operativas que estimaba sospechosas.

Diferencias entre el blanqueo doloso por dolo eventual y el blanqueo por imprudencia.

La actuación del letrado como partícipe del blanqueo lo es por dolo y no por imprudencia. Diseñó la operativa de sociedades off shore. Él actuaba como administrador en España y fuera de España eran despachos vinculados al suyo. La sociedad española estaba participada por dos panameñas. Utilizaba testaferros y una cuenta en la que sus clientes ingresaba en dinero para aparentar que estaba bancarizado.

Por lo que respecta al conocimiento del origen ilícito del dinero y bienes gestionado resulta de la opacidad de su administración, la utilización de sociedades en paraísos fiscales, el carácter simulado de la sociedad, y el elevado nivel de vida del cliente. El acusado nunca despejó las dudas que debía albergar sobre el origen del patrimonio de su cliente, ni se lo preguntó. En el año 2005 el cliente del despacho fue objeto de una querrela por alzamiento de bienes y una copia de esa querrela fue encontrada en el despacho de abogados.

4.- Así mismo, el Pleno ha valorado que Diego Jesús Gómez-Reino Delgado acredita otras actividades jurídicas de análoga relevancia y actividades docentes y discentes, entre las que han de destacarse las siguientes:

a) Profesor titular de derecho penal (parte especial) en el Centro asociado de la UNED en las Islas Baleares, de la Escuela de Práctica Jurídica en los cursos académicos 2002-2003 y 2003-2004. Profesor de la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Palma de Mallorca durante los cursos académicos 1998-1999, 2002-2003, 2003-2004. Continúa colaborando con el Colegio en cursos y simulación de juicios para Letrados en Máster de práctica jurídica (2017-2018 y 2019-2020).

b) Ponente o conferenciante en una decena de cursos y jornadas en diversas instituciones. Asimismo, ha sido director del curso de formación del Consejo General del Poder Judicial - año 2018 -, sobre Contratación Administrativa e Implicaciones Penales.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

c) Diplomatura en asesoría de empresas, con formación en materia contable y financiera, Máster en Derecho marítimo y Máster de práctica jurídica por la Universidad de Santiago de Compostela

Todo lo expuesto hace del magistrado Diego Jesús Gómez-Reino Delgado, único candidato a la plaza, plenamente idóneo para el desempeño de la misma.

Frente a este acuerdo formula voto particular María Concepción Sáez Rodríguez, al que se adhieren Álvaro Cuesta Martínez y María Pilar Sepúlveda García de la Torre.

Once.- Examinada y debatida la Propuesta de la Comisión Permanente (1.1-3, de 14 de enero de 2021) para provisión de la Presidencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, vacante por expiración del mandato de la anteriormente nombrada, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en sesión celebrada el 28 de enero de 2021, acuerda nombrar presidenta de la Audiencia Provincial de Ciudad Real a la magistrada María Jesús Alarcón Barcos.

El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y en la capacidad de la candidata nombrada, única solicitante de la plaza convocada.

1.- María Jesús Alarcón Barcos ingresó en la Carrera Judicial por el turno libre el 30.09.1987. Ostenta el nº 740 del escalafón general, cerrado a 31.03.2018, con más de 33 años de ejercicio ininterrumpido de jurisdicción.

Sus destinos por orden cronológico (desde la fecha de toma de posesión) son los siguientes: como jueza, el Juzgado de Distrito núm. 1 de Ibiza (23.10.1987-15.02.1989); como magistrada: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Loja (06.03.1989-27.12.1989). Juzgado de Instrucción núm. 8 de Málaga (15.01.1990-11.06.2002). Sección 9ª de la Audiencia Provincial de Málaga (18.06.2002-14.04.2010). Presidenta de la Audiencia Provincial de Ciudad Real (26.04.2010 a la actualidad).

2.- La candidata nombrada, como ya se ha apuntado, es la presidenta de la Audiencia Provincial de Ciudad Real (26.04.2010 a la actualidad) y miembro electo de la Sala de Gobierno del TSJ de Castilla-La Mancha desde 2010, y comienza su programa realizando una valoración de la situación de la audiencia provincial, que está compuesta por 2 secciones mixtas, una con 5 magistrados y otra con 4 magistrados.

Ante la pendencia de asuntos civiles se solicitó la adopción de medidas de apoyo, que se concretaron en 5 comisiones de servicio sin relevación de funciones con el objeto de constituir una sección funcional de apoyo para asumir el conocimiento de los recursos de apelación en materia de condiciones generales de contratación de financiación con garantías reales inmobiliarias, la medida resultó positiva, pero insuficiente y pone de relieve un problema estructural que exige la adopción de otras medidas de apoyo.

En todo caso considera oportuna la creación de plazas de magistrado y la separación en jurisdicciones de las secciones, con 5 magistrados en la sección penal y 6 en la sección civil.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

Realiza una evaluación de la situación de los órganos unipersonales de la provincia desglosados por partidos judiciales y por órdenes jurisdiccionales, realizando las propuestas oportunas en cada caso y poniendo de manifiesto un profundo conocimiento de la situación de los juzgados de Ciudad Real, destaca su propuesta de crear un juzgado de lo mercantil, creación de dos juzgados mixtos en Ciudad Real, comarcalización de los juzgados de violencia sobre la mujer, creación del juzgado de lo penal número 4, creación del juzgado de lo social número 4 y refuerzo de la oficina judicial en Tomelloso,

Considera necesario mantener reuniones entre los magistrados de la audiencia para obtener una unidad de criterio en la medida de lo posible, debatiendo los asuntos sobre los que se constata una disparidad de criterios, en general propone una línea continuista en las relaciones con los magistrados de la audiencia y la información de sus acuerdos a operadores jurídicos no judiciales.

En cuanto a los medios materiales propone un mejor acondicionamiento de las instalaciones de archivo, así como de las salas de rueda de reconocimiento.

En cuanto a los medios materiales pide un refuerzo general de las oficinas y en concreto la dotación de un gabinete psico social adscrito a los juzgados de violencia sobre la mujer.

Propone la creación de un instituto de medicina legal en Ciudad Real. Remarca un esfuerzo en favorecer las condiciones que permitan la obtención de conformidades penales en colaboración con la fiscalía y la implantación de la mediación como una forma extraprocésal de solución de conflictos.

3.- En relación con la actividad jurisdiccional, tanto la selección general de resoluciones como la más específica, de tres resoluciones, demuestran por sí solas la extensión y rigor del conocimiento jurídico del candidato nombrado, y que quedan comprendidos dentro de un estándar de excelencia jurisdiccional:

1ª) Sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad de 07.09.2018, - ECLI:ES:APCR:2018:891.

Se abordan cuestiones de sobre vulneración del principio acusatorio sustentado por la inconcreción de los hechos contenidos en los hechos declarados probados; vulneración de la cosa juzgada material; aplicación del delito de coacciones de hostigamiento inmobiliario previsto en el art. 172.1 párrafo tercero; delito de lesiones psíquicas e indemnización por los daños morales.

Se trata de un recurso en el que se alegó una vulneración del principio acusatorio al considerar que los acusados no pudieron conocer de manera plena y precisa los hechos de la acusación formulada en su contra. La audiencia desestima esa pretensión puesto que una indeterminación en las fechas no supone una inconcreción de los hechos, que estaban claramente determinados.

También se alega la existencia de cosa juzgada, pero también es desestimada puesto que los hechos objeto de este asunto no habían sido enjuiciados con anterioridad.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

Es objeto del asunto el delito de amenazas por actos hostiles o humillantes que tengan por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda, actos que de manera aislada no tienen relevancia penal, peor que la sistemática de su realización entrañan un peligro para el bien jurídico protegido.

La audiencia estima el recurso en cuanto a la responsabilidad civil por los daños psíquicos y morales sufridos por los propietarios.

2ª) Sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad de 08.04.2019 - ECLI:ES:APCR:2019:468.

La sentencia tiene por objeto un delito de agresión sexual de un padre a dos hijas menores por un periodo de 5 meses, aprovechando la ausencia de España de su madre durante ese tiempo.

La defensa rechaza el valor de la prueba practicada, tanto la exploración realizada en las dependencias de la Guardia Civil, como la ausencia de interprete en la declaración de una menor, que fue auxiliada por su otra hermana y la madre.

Entiende la audiencia que las circunstancias de la denuncia no obstaculizan el curso del proceso, que en este caso la declaración en fase de instrucción fue efectuada con todas las garantías.

Otro problema es que una de las hijas se retractó en la fase de juicio oral, pero en dicho interrogatorio se pusieron de manifiesto sus contradicciones, a lo que se añade la dificultad al realizar la declaración por videoconferencia desde Rumania. Valorando el conjunto de lo actuado la audiencia entendió que la declaración efectuada en fase de instrucción puede ser valorada y considerada suficiente para enervar la presunción de inocencia. La otra hermana se mantuvo firme en sus declaraciones.

3ª) Sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad de 17.04.2017 - ECLI:ES:APCR:2017:417

Se abordan cuestiones relativas a la infracción de normas procesales por no suspender la vista para nueva citación del testigo incomparecido acordada como diligencias final y privación del derecho hacer alegaciones en los cinco días siguientes a la vista según se acordó previamente; calificación del contrato suscrito el 9 de mayo de 2006; incumplimiento contractual.

Infracción de las normas procesales por no suspender la vista para nueva citación de testigo que no ha comparecido acordada como diligencia final, se desestima la práctica de la prueba en la segunda instancia por considerar que la declaración no era necesaria atendiendo a la cuestión controvertida.

La calificación del contrato se realiza como de compraventa, no como promesa de venta, el incumplimiento del plazo fijado en la cláusula sexta del mismo no se estima como un plazo esencial y por tanto no provoca la resolución del contrato.

4.- Al margen de su actividad jurisdiccional y gubernativa, el Pleno ha valorado que la candidata nombrada ha sido la candidata ha sido profesora de la escuela de práctica jurídica del ilustre colegio de abogados de Málaga hasta el



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

año 2010 y de la escuela de práctica jurídica del ilustre colegio de abogados de Ciudad Real en el curso 2013/14.

Ha sido ponente en diversas charlas, seminarios y coloquios, algunas en jornadas organizadas por el Consejo General del Poder Judicial, incluida una beca del Consejo General del Poder Judicial como experta en derecho comunitario en la Universidad de Málaga, también actuó como experta en seminarios organizados por el Consejo General del Poder Judicial en colaboración con el Ministerio de Justicia de Bulgaria.

Ha sido presidente de la Junta Electoral Provincial en el año 2011 y en las 3 elecciones de 2019.

Todo lo expuesto hace de la magistrada María Jesús Alarcón Barcos, única candidata a la plaza, plenamente idónea para el desempeño de la misma.

Frente a este acuerdo formula voto particular María Concepción Sáez Rodríguez, al que se adhieren Álvaro Cuesta Martínez y María Pilar Sepúlveda García de la Torre.

Doce.- Aprobar la propuesta de la Comisión Permanente (1.1-11, de 21 de enero de 2021) relativa a dejar desierta la convocatoria de un puesto de vocal togado del Tribunal Militar Tercero de Barcelona, ante la renuncia expresa de los dos aspirantes a la plaza.

Trece.- Examinada y debatida la Propuesta de la Comisión Permanente (3-3, de 21 de enero de 2021) para provisión de un puesto de inspector/a delegado/a, orden penal, vacante en el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, el Pleno acuerda nombrar al magistrado Ricardo Rodríguez Fernández.

Este nombramiento se fundamenta en los principios de mérito y capacidad en relación con las características del puesto a proveer. Sin desmerecer la valía del resto de candidatos/as, el Pleno ha valorado la idoneidad de Ricardo Rodríguez Fernández para el puesto de inspector/a delegado/a en el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, orden jurisdiccional penal, al considerar que concurren en él, más que en cualquier otro/a candidato/a, los méritos específicos del puesto de trabajo que se establece en el Anexo I de la convocatoria.

El candidato nombrado ingresó el 15.12.2020 en la Carrera Judicial por el turno de juristas de reconocida competencia. Su primer destino fue el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº. 2 de Catilla y León (Burgos, 02.01.2001 a 04.04.2003), posteriormente sirvió en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Móstoles (23.04.2003 a 08.03.2006), en el Juzgado de lo Penal nº 4 de Alcalá de Henares (08.03.2006 a 30.12.2008), en el Juzgado de lo Penal nº 16 de Madrid (21.01.2009 a 22.04.2010) y desde el 29.04.2010 está destinado en el Juzgado de lo Penal nº 11 de Madrid.

Destacan esencialmente en el candidato nombrado sus amplios conocimientos en el orden penal, acreditados tanto por el ejercicio jurisdiccional



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

en órganos pertenecientes a dicho orden jurisdiccional, como por otros méritos que, resumidamente, se exponen a continuación:

Ingresó por oposición en el Cuerpo de Secretarios Judiciales en 1985, en el prestó servicios hasta 1999, si bien desde 1995 a 1999 fue letrado del Gabinete Técnico de Información y Documentación del Tribunal Supremo (adscrito a la Sala de lo Penal).

Ricardo Rodríguez Fernández es doctor en Derecho por la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX), con una tesis sobre penas privativas de libertad y responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Ha impartido docencia en diversas titulaciones en universidades y otros organismos. Así, entre otros, ha sido profesor en el Máster de psicología clínica legal y forense de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense (Madrid) (1998 a 2000), profesor colaborador del Máster Especialidad en Compliance (responsabilidad penal de las personas jurídicas) de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR, 2017/18) y del Máster Especialidad en Derecho Penal Económico en el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB, 2016/17 y 2017/18).

Igualmente, ha impartido numerosas conferencias y ponencias en cursos, seminarios y mesas redondas organizadas por diversas instituciones públicas y privadas.

Es autor de 9 monografías, 23 colaboraciones en obras colectivas y 50 artículos doctrinales. Entre las monografías destaca "Los juicios rápidos y el nuevo procedimiento abreviado", Ed. Comares. Granada, 2.005. Entre las colaboraciones en obras colectivas: "*Aspectos Penales*" en "Separación y divorcio: manual de urgencia y primeros auxilios", Coord. J. A. Arcila, Ed. Wolters Kluwers, Madrid. 2020; y "*La prisión como pena. Evolución histórica. Situación actual. Propuestas de lege ferenda*" en La prisión preventiva del encausado: límites y abusos (coordinadores: P. Simón Castellano y A. Abadías Selma). Ed. Wolters Kluwers, enero, 2021.

Entre sus artículos doctrinales, destacan "*Responsabilidad penal del perito en su intervención: delitos en que puede incurrir en su pericia*" en Diario La Ley, Nº 9521, 2019; y "*Problemática sobre el régimen sancionador en el Estado de Alarma*", en Diario La Ley, Nº 9626, 2020.

La combinación de todos los elementos subrayados y otros más que aparecen especificados en el currículum presentado por el candidato nombrado, ha llevado al Pleno a considerar que Ricardo Rodríguez Fernández presenta el perfil más idóneo para el desempeño del puesto convocado, sin desmerecer en absoluto la valía profesional del resto de candidatos/as.

Catorce.- Aprobar, en los términos de la propuesta de la Comisión Permanente (3.1, de 22 de diciembre de 2020), la renovación por un año, con efectos del día 12 de febrero de 2021, del nombramiento de María del Carmen Cimas Giménez, que continuará prestando sus servicios en el mismo puesto de



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

trabajo que actualmente ocupa como inspectora delegada del Servicio de Inspección, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

Quince.- Aprobar, en los términos de la propuesta de la Comisión Permanente (3.2, de 22 de diciembre de 2020), la renovación por un año, con efectos del día 12 de febrero de 2021, del nombramiento de Juan Carlos Garcés Pérez, que continuará prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa como jefe de Sección de Informática Judicial del Centro de Documentación Judicial, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

Dieciséis.- Aprobar, en los términos de la propuesta de la Comisión Permanente (3-2, de 21 de enero de 2021), la rectificación del "Acuerdo 3-3" de la Comisión Permanente de fecha 22 de diciembre de 2020, relativa a la renovación de servicios en el Consejo General del Poder Judicial de José María Asencio Gallego, jefe de Área de Relaciones Externas e Institucionales de la Escuela Judicial, en el sentido de sustituir "la renovación por un año, con efectos del día 1 de junio de 2020" por "la renovación por un año, con efectos del día 13 de febrero de 2021".

Diecisiete.- Aprobar, por asentimiento, con las observaciones formuladas en el Pleno, el informe al proyecto de decreto por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Asistencia Jurídica al Servicio Andaluz de Salud y de los Letrados y Letradas de sus Servicios Jurídicos.

Dieciocho.- Desestimar el recurso de alzada núm. 329/2020 interpuesto por XXX, contra el acuerdo de la Comisión Disciplinaria de este órgano constitucional adoptado en su reunión de fecha 7 de septiembre de 2020, dictado en el seno del expediente disciplinario núm. 13/2020, instruido por su actuación como XXX, por el que se le impone una sanción de multa de ochocientos euros (800 €), como responsable de una falta grave del artículo 418.11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La propuesta ha sido aprobada por mayoría de los miembros del Pleno.

Diecinueve.- Desestimar el recurso de alzada núm. 323/20 interpuesto por doña XXX contra el acuerdo de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial de fecha 29 de septiembre de 2020, dictado en el seno del expediente disciplinario núm. 5/2020 por su actuación como titular XXX por la que se le impone una sanción de suspensión de un (1) mes por la comisión de una falta muy grave de desatención en el ejercicio de los deberes judiciales, prevista en el artículo 417.9 de la LOPJ.

La propuesta ha sido aprobada por asentimiento.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

Veinte.- Desestimar el recurso de alzada núm. 354/20 interpuesto por XXX, contra el acuerdo de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial de 11 de noviembre de 2020, dictado en el seno del expediente disciplinario 17/2020, por el que se le impone una sanción por su actuación como magistrada XXX de suspensión por tiempo de un mes, como responsable de una falta muy grave del artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La propuesta ha sido aprobada por asentimiento.

Vº Bº Presidente

Secretario General